

C.A. de Temuco

Temuco, nueve de julio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

1º. A folio 1 comparece doña GIEGLIOLA VIVIANA BURGOS PÉREZ, abogada, cedula nacional de identidad número 16.946.027-2, Defensora Penal Pública Penitenciaria, Región de la Araucanía, domiciliada en Calle Portales N° 361 de la ciudad de Temuco, en representación de don FRANCISCO FACUNDO JONAS HUALA, cedula de identidad número 14.880.434-6, quien actualmente se encuentra cumpliendo condena en CCP Temuco, deduciendo acción constitucional de amparo en contra de la Resolución Ordinario N° 09.00.001592/2024, de fecha 27 de junio del 2024, de la Dirección Regional de GENDARMERÍA DE CHILE, Región de La Araucanía, dictada por su Director Regional, el Coronel Alberto Figueroa Quezada, que no da lugar a dejar en libertad a su representado, en virtud de los antecedentes que expone.

Indica que el amparado actualmente se encuentra cumpliendo condena en el recinto de cumplimiento penitenciario de la ciudad de Temuco, en causa RUC 1300038520-9, RIT 73-2013, del Tribunal de Garantía de Rio Bueno. En dicho procedimiento resultó condenado a una pena de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo por el delito de incendio y 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, por el delito de porte ilegal de armas de fuego prohibidas. La sentencia fue dictada con fecha 21 de diciembre de 2018. Según los cómputos contenidos en la ficha única de condenado actual, le resta un saldo de 863 días, iniciando el cumplimiento de condena con fecha 4 de enero de 2024, y registrando como fecha de término el 8 de junio del 2025, y además registra un abono de 341 días.

Explica que durante el cumplimiento de condena, con fecha 21 de enero del año 2022, mediante acta número 78-2021, le fue otorgado el beneficio de libertad condicional, por resolución de la Comisión de Libertad condicional¹. Más tarde, con fecha 16 de febrero del 2022,



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KXXHXXXLJRR

mediante el acta 81-2022, la Comisión de Libertad Condicional revoca el beneficio. Al revocar la libertad condicional, se decreta orden de arresto en su contra para que ingrese al cumplimiento efectivo de su condena. Al tomar conocimiento de que el amparado ya no se encontraba en territorio nacional es que se da inicio al proceso de extradición desde Argentina.

Añade que en causa rol 94-2023 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, con fecha 6 de febrero del año 2023, se acoge la solicitud de extradición planteada por el Ministerio Público respecto de su representado. En dicha resolución judicial se expresó que el pedido de extradición lo era para cumplir un saldo de condena de un año cuatro meses y 17 días. El condenado se encontraba detenido en la localidad de El Bolsón, Provincia de Rio Negro, República de Argentina.

Explica que con fecha 31 de julio del año 2023, El estado argentino resuelve acoger el pedido de extradición, mediante sentencia dictada por el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche FGR 416/2023. Esta decisión es confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha 14 de noviembre del año 2023. En dicha sentencia también se informó que a su representado le quedaba un saldo de pena por cumplir de 1 año, 4 meses y 17 días

En definitiva, el saldo informado para que el amparado cumpla su sentencia condenatoria y que sienta las bases para iniciar el procedimiento de extradición, así como también el que genera convicción en los tribunales de la República Argentina, culminando con la aprobación de la petición de extradición es de 1 año, 4 meses y 17 días.

Expone que se presentó una solicitud de abono del periodo de tiempo que su representado estuvo privado de libertad en el Estado Argentino, producto de la solicitud de extradición que se estaba tramitando. Con fecha 16 de abril del año 2024 se lleva a cabo audiencia en causa RIT 73-2013 del Tribunal de Garantía de Rio Bueno, el que acogió la solicitud de la defensa. Por tanto, se abonaron



los 11 meses y 5 días que estuvo detenido en la República Argentina. De este modo, del saldo de 1 año 4 meses y 17 días que le quedaban por cumplir, conforme a su sentencia de extradición, afirma que se debían restar estos 11 meses y 5 días (en adelante 341 días).

Hace presente que la defensa penitenciaria, mediante oficio número 07 de fecha 26 de junio del año 2024, solicita a Gendarmería de Chile que informe la situación procesal de su representado. En particular, se pide corrección de su computo de condena y se dé curso a tramitar su libertad. Mediante ordinario N° 09.00.001592/2024, de fecha 27 de junio del presente año, el Director Regional de Gendarmería de la Región de la Araucanía, informó que judicializaría el caso para mayor entendimiento de la situación. En definitiva, no accede a la petición de la defensora y solo informa que derivará el caso para que sea la Comisión de Libertad Condicional quien informe el saldo de pena por revocación de la libertad condicional del amparado.

Invoca el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para solicitar que se considere la calidad de indígena y de lonko de su representado, al momento de decidir acerca de su libertad.

Entiende que, por un acto administrativo, emanado de Gendarmería de Chile, se han computado periodos de tiempos distintos a aquel que se autorizó en las respectivas sentencias de extradición. En efecto, en virtud del mismo se autoriza únicamente a cumplir un saldo de condena de 1 año, 4 meses y 17 días (503 días). A este periodo de tiempo se debe descontar además aquel periodo abonado conforme a lo establecido en el artículo 348 del Código Procesal Penal, correspondiente a 11 meses y 5 días (341 días). Así las cosas, el saldo que al amparado le resta por cumplir es de 5 meses y 12 días (162 días).

Continúa destacando que el condenado reingresó a cumplimiento el 4 de enero del 2024. Por lo mismo, ya se encontraría superado el tiempo de condena que debía cumplir, el cual correspondía al 14 de junio del 2024. De acuerdo con el principio de especialidad que rige en materia de extradición, le está prohibido al país requirente someter al



extraditado a procesos por delitos cometidos anteriormente o hacerle cumplir condenas diferentes de aquella que se esgrimió como fundamento para solicitar la entrega. Salvo, evidentemente, que se solicite una nueva extradición en razón de esos otros delitos o condenas y que el Estado requerido la acoja².

Pide tener por interpuesta acción constitucional de amparo a favor de don Francisco Facundo Jonas Hualas y en contra de la resolución de fecha 27 de junio del año 2024, emanada de la Dirección Regional de Gendarmería de la Región de La Araucanía, por su Director Regional, el Coronel Alberto Figueroa Quezada, solicitando se acoja la acción constitucional, ordenando la libertad del amparado de manera inmediata, o lo que se estime pertinente.

Acompaña la documentación que señala.

2º. Informando, Gendarmería de Chile aporta la información que a continuación se detalla.

Expresa que por sentencia del Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, en causa RIT N° 99-2014, el interno fue condenado a 6 años por el Delito de Incendio y 3 años y 1 día por el Delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego. Para efectos de cálculo, son 3.290 días de privación de libertad.

Agrega que a estos 3.290 días, se descuenta lo abonado por la sentencia condenatoria en causa RIT N° 99-2014, que son 1276 días. Esto genera un Saldo de 2014 días, a cumplir en calidad de condenado en el C.C.P. de Temuco, desde el 22 de diciembre de 2018. De este modo, corresponde la fecha término original el 26.06.2024.

Precisa que en el C.C.P. de Temuco cumplió efectivamente 1.127 días de su condena, desde el 22 de diciembre de 2018 hasta el 21 de enero de 2022. De este modo, le quedó un Saldo por cumplir de 887 días.

Indica que el día 21 de enero de 2022 el interno egresa del C.C.P. de Temuco, por beneficio de Libertad Condicional quedando un Saldo de 887 días. Alcanzó a cumplir 24 días de su pena en



libertad. Luego la Excelentísima Corte Suprema con fecha 15 de febrero de 2022 revoca su Libertad Condicional, quedando entonces un Saldo de pena por cumplir de 863 días. Añade que esto fue informado al Tribunal con fecha 16 de febrero de 2022, mediante Ord. N ° 200 del Jefe del CAIS de Temuco.

Expone que, una vez extraditado, el condenado reingresa al país a cumplir el saldo de su pena al C.C.P. de Temuco, por orden del Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno, el día 4 de enero de 2024. Por tanto, al condenado le restaban por cumplir 863 días de privación de libertad.

Con fecha 16 de abril de 2024 el Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno le reconoce un abono a su tiempo de condena de 11 meses y 5 días, período que se mantuvo recluso en la República Argentina, que equivale a 341 días. Descontados a su saldo de pena de 863 días, genera un nuevo saldo de pena a cumplir de 522 días.

Concluye señalando que estos 522 días, se cumplirían desde el día 04 de enero 2024, que es cuando reingresa al C.C.P. de Temuco (después de su extradición), lo cual arroja como fecha de término de condena el 8 de junio de 2025. Y, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería, no puede autorizar el egreso de un condenado sin la previa autorización judicial.

Por último, hace presente que en fallo de fecha 7 de febrero de 2023 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia, que acogió la solicitud de extradición del condenado, indicó en el numeral octavo de la parte considerativa que el saldo de la pena que debía cumplir el condenado correspondía 1 año 4 meses y 17 días. Al realizar el cálculo del saldo reconocido por dicha Corte se puede dilucidar que este saldo corresponde desde la fecha del fallo hasta el término de condena original el día 26.06.2024. Esto dista de los 863 días que le quedaban por cumplir cuando se fugó, y de acuerdo al criterio de Gendarmería equivalen a 2 años, 4 meses y 11 días, desde la fecha de revocación de la Libertad Condicional



En ese sentido, destaca que la defensa presentó ante la I. Corte de Apelaciones de Valdivia, cuando se debatía la extradición, una ficha única de condenado emitida por Gendarmería. Esta ficha correspondía a aquella que se crea cuando el interno ingresa a cumplir condena. Sin embargo, hace presente que, al obtener el beneficio de libertad condicional y luego encontrarse prófugo de la justicia, Gendarmería de Chile no puede conocer cuando terminaría de cumplir su saldo de pena. Esto sólo se puede calcular cuando el interno reingresa a la unidad penal, pues sólo ahí se cuenta con una fecha cierta de inicio que poder registrar y esto sucedió el 4 de enero de 2024.

3º. Con fecha 8 de julio de 2024 se procedió a la vista de la causa, alegando la representante del condenado, por el recurso, y la representante de Gendarmería de Chile.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Hechos denunciados y pretensión de la accionante. La amparada denuncia como acto ilegal la Resolución Ordinario N° 09.00.001592/2024, de fecha 27 de junio del 2024, de la Dirección Regional de Gendarmería, Región de La Araucanía, dictada por su Director Regional, el Coronel Alberto Figueroa Quezada, que no da lugar a dejar en libertad a su representado.

Sostiene que dicha acción es ilegal y vulnera el derecho fundamental a la libertad personal establecida en el artículo 19, número 7, de la Constitución, por cuanto su representado ya habría cumplido la condena por la que fue requerido mediante extradición a la República Argentina.

Concluye solicitando que se acoja la acción de protección y se deje sin efecto la Resolución impugnada y se ordene la inmediata libertad del condenado o lo que esta Ilustrísima Corte estime pertinente.

SEGÚNDO: Informe de la recurrida Gendarmería de Chile. Gendarmería de Chile, informando la acción de amparo, afirma que no ha incurrido en acto ilegal alguno.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KXXHXXXLJRR

Luego de detallar el modo en que se ha cumplido la condena por parte del amparado, termina sosteniendo que el condenado no ha finalizado el cumplimiento de la condena impuesta por un tribunal de la República de Chile. En efecto, le restaría por cumplir un saldo de 522 días, contados desde el día 4 de enero 2024, que es cuando reingresa al C.C.P. de Temuco (después de su extradición), lo cual arroja como fecha de término de condena el 8 de junio de 2025.

Por otra parte, explica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º, letra b), de la Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería, debe cumplir con las órdenes de ingreso y egreso a los establecimientos penitenciarios, emitidas por los tribunales. En el caso del condenado solo ha recibido orden de ingreso y no ha recibido orden de egreso.

TERCERO: Procedencia de la acción de amparo. La acción constitucional de amparo se encuentra prevista en el artículo 21 de la Constitución. Esta acción puede ser interpuesta por cualquier individuo, por sí o por un tercero a su nombre. En general, procede en caso que una persona “*se hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes*” (artículo 21, inciso primero). Además, la acción de amparo procede “*en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual*” (artículo 21, inciso tercero). De este modo, la acción de amparo resguarda los derechos fundamentales a la libertad personal y a la seguridad individual a que se refiere el artículo 19, número 7, de la Constitución.

En caso de verificarse una afectación de la libertad personal o la seguridad individual, la Corte dictará las medidas que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado (artículo 21, inciso tercero, en relación con el inciso primero).



En definitiva, se requiere el cumplimiento de dos requisitos. Primero, una privación de libertad. Segundo, que la privación de libertad provenga de un acto ilegal. La arbitrariedad, por tanto, y a diferencia de lo que ocurre con la acción de protección, no es un supuesto o requisito de procedencia de la acción de amparo.

CUARTO: Hechos no controvertidos. Para una mejor decisión de la presente causa, conviene explicitar los hechos no controvertidos en la misma:

1) El amparado fue condenado a dos penas privativas de libertad. Una de ellas a seis años de presidio mayor en su grado mínimo. La otra a tres años y un día de presidio menor en su grado máximo.

2) Al condenado se otorgó la libertad vigilada el día 21 de enero de 2022, se dio a la fuga y por lo mismo se le revocó dicho beneficio.

3) Al solicitar la extradición el Estado de Chile indicó al Estado de Argentina que al condenado le restaba cumplir un año , cuatro meses y 17 días de su pena privativa de libertad.

4) En la información proveída por el Estado de Chile al Estado de Argentina existe un error, pues el saldo de pena por cumplir que restaba al condenado al momento de revocársele la libertad condicional era de 887 días. Al abonar el tiempo que estuvo privado de libertad en Argentina en virtud del proceso de extradición, se genera un saldo final de 522 días de privación de libertad que le restan por cumplir.

QUINTO: Análisis de la ilegalidad en la actuación de Gendarmería. A partir de lo señalado en los considerandos precedentes, el primer problema que debe resolver esta Ilustrísima Corte consiste en determinar si ha existido ilegalidad en la actuación de la recurrida.

Al efecto se debe reiterar que la arbitrariedad no es un elemento a considerar en la evaluación de la procedencia de la acción constitucional de amparo. Esto se debe a que solo la ilegalidad, y no la arbitrariedad, se contempla en el artículo 21 de la Constitución.



Para resolver la cuestión conviene recordar lo dispuesto en el artículo 3º, letra b), del Decreto Ley N° 2859, de 1979. Este precepto establece lo siguiente: “*Corresponde a Gendarmería de Chile: b) Cumplir resoluciones emanadas de autoridad competente, relativas al ingreso y a la libertad de las personas sometidas a su guarda, sin que le corresponda calificar el fundamento, justicia o legalidad de tales requerimientos*”.

Por otra parte, respecto del amparado, Gendarmería de Chile se encuentra cumpliendo una resolución judicial, en los términos que le fue instruido por el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia. Y no se le ha notificado una resolución judicial que ordene la libertad del condenado.

La sola consideración de la disposición y de los hechos recién mencionados permite concluir que Gendarmería de Chile no ha actuado de manera ilegal. Precisamente al contrario, su conducta se ha ajustado a las exigencias establecidas por el texto normativo al que se encuentra sometido. En particular, porque no le corresponde “*calificar el fundamento, justicia o legalidad de tales requerimientos*”, es decir, de las resoluciones emanadas de los tribunales y que ordenan el ingreso o la libertad de las personas sometidas a su guarda.

De acuerdo con lo expuesto, la defensa debió deducir la acción cautelar contra sujeto diverso de Gendarmería de Chile. En particular, contra el órgano encargado de definir si resulta procedente la libertad del condenado por haber cumplido el tiempo de privación de libertad establecido en su condena.

Por esta sola consideración la acción de protección deberá ser desestimada y así se dirá en lo resolutivo.

SEXTO: Análisis del cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte del Estado de Chile. Sin perjuicio de lo señalado en el considerando precedente, corresponde analizar la alegación de la defensa, relativa al cumplimiento de obligaciones internacionales por parte de Chile. En



particular, las obligaciones asumidas por el procedimiento de extradición y, singularmente, la aplicación del principio de especialidad.

Actualmente se encuentra vigente el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del Mercosur y la República de Bolivia y la República de Chile. Dicho tratado fue aprobado por Chile mediante Decreto 35, de 18 de abril de 2012, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El artículo 14.1 de dicho instrumento internacional regula el principio de especialidad. En la parte pertinente de la mencionada disposición textualmente se prescribe lo siguiente: *“La persona entregada no será detenida, juzgada ni condenada en el territorio del Estado Parte requirente por otros delitos cometidos con anterioridad a la fecha de la solicitud de extradición y no contenidos en ésta”*.

El principio de especialidad, normativamente expresado en los términos recién transcritos, constituye una prohibición. Impide que el extraditado sea afectado en modo alguno por hechos o delitos diversos de aquellos por los que fue requerido en el procedimiento de extradición y que sean anteriores a la fecha de la solicitud.

De este modo, la limitación derivada del principio de especialidad, como obligación del Estado de Chile, se refiere únicamente a hechos y a delitos. De este modo, el extraditado no puede ser enjuiciado ni condenado por hechos o delitos diversos de los expresados en la solicitud de extradición. El señalamiento de la pena tiene por única finalidad permitir la evaluación del principio de mínima

En dicho sentido, la académica Virgina Arango expresa que el principio de especialidad establece que, la solicitud de extradición, *“para poder acceder a ella en referencia a un delito determinado, con expresa promesa de que el extraditado, una vez entregado, no será juzgado por otros delitos que no hubieran sido objeto de la demanda de extradición”* (Virgina Arango Durling (2017): “Aspectos penales de la extradición”, en *Boletín de Ciencias Penales*, Año 3, N° 7, p.49).



Este entendimiento se encuentra tanto en la formulación original del principio de especialidad, como en su actual regulación en el derecho internacional. En ese sentido, explica la académica Idarmis Knight:

“El principio de especialidad ya fue incluido en las Resoluciones del Instituto de Derecho Internacional de Oxford de 1881, estas expresaron que “(...) el Gobierno que ha obtenido la Extradición de un individuo, por un hecho determinado, está obligado de pleno derecho, salvo disposición en contrario, a no permitir el juicio del extraditado o su castigo, más que por ese hecho.”

Su manifestación práctica, se expresa cuando el Estado requirente se compromete a no extender el enjuiciamiento o el cumplimiento de condena a hechos distintos y anteriores a aquellos por lo que se solicita, y es autorizada la entrega del reclamado. Este principio constituye una pieza básica reconocida por casi todos los Tratados de Extradición, del que dimanen compromisos que alcanzan a la persona entregada, en cuanto a que no será acusada ni condenada por hechos distintos de los que fundamentan la entrega” (

Idarmis Knight Soto, “Los principios que caracterizan la Extradición. Una mirada desde la Ley belga de 1833, hasta la actualidad”, pp. 7 y 8).

De acuerdo con lo expresado, no existe limitación normativa alguna para que el Estado requirente aplique al extraditado una pena privativa de libertad de duración diversa a la indicada en la solicitud de extradición. Esto es especialmente procedente en un caso como el actual. En efecto, en el presente caso la duración del saldo de la pena solo podía establecerse una vez que el condenado fuere recapturado y puesto a disposición de Gendarmería de Chile para reiniciar el cumplimiento de su condena. Solo entonces sería posible conocer los días de privación de libertad pendientes de cumplimiento, al restarle aquellos en que hubiere estado privado de libertad en virtud del procedimiento de extradición.



También por lo expuesto precedentemente, la acción de amparo deberá ser rechazada y así se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Amparo, SE DECLARA:

Que **SE RECHAZA** la acción de amparo deducida por doña Giegliola Viviana Burgos Pérez, abogada, Defensora Penal Pública, por el amparado don FRANCISCO FACUNDO JONAS HUALA, en contra de la Resolución Ordinario N° 09.00.001592/2024, de fecha 27 de junio del 2024, de la Dirección Regional de Gendarmería, Región de La Araucanía, dictada por su Director Regional, el Coronel Alberto Figueroa Quezada, que no da lugar a dejar en libertad a su representado.

Se previene que el Ministro Sr. Alberto Amiot Rodríguez, no comparte los fundamentos vertidos en el considerando sexto de la presente sentencia.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Sentencia redactada por el Abogado Integrante Sr. Luis Iván Díaz García.

Rol N° Amparo-170-2024.(jog)



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KXXHXXXLJRR

Pronunciada por la Segunda Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, integrada por el Ministro Sr. José Héctor Marinello Federici y el Ministro Sr. Alberto Amiot Rodríguez. Se deja constancia que no firma el Abogado Integrante Sr. Iván Díaz García, no obstante concurrir a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausente.

En Temuco, a nueve de julio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: KXXHXXXLJRR